

# Alarma en el Gobierno: Presupuestos gripados y retraso en las reformas



LA AGUJA DE MAREAR

Javier Ayuso

El presidente del Gobierno volverá a intentar hoy transmitir confianza mediante una de las escenificaciones que tanto le gustan a él y a su *spin doctor*, Iván Redondo. Pedro Sánchez presentará el documento central del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España. Un proyecto que en cualquier democracia avanzada debería haber sido consensuado con la oposición, pero que aquí se ha elaborado de forma unilateral y con la mayor opacidad posible. Es la forma de actuar del líder del PSOE, que el miércoles comparecerá en el Congreso de los Diputados para dar cuenta de sus planes y pedir una unidad que él esquiva cada día.

Ayer, en un acto organizado por un medio de comunicación, Sánchez mostraba la mayor de sus sonrisas cuando anticipaba que el plan incluiría 212 medidas, de las que 110 eran inversiones y 102, reformas. Lo que no decía es que lleva semanas negociando con las autoridades comunitarias el paquete reformista y que Bruselas no parece estar muy de acuerdo con parte de ellas.

La realidad de la economía española no es, ni mucho menos, como nos quieren hacer creer los miembros del Gobierno que dan la cara en las últimas semanas. Las previsiones que sirvieron para elaborar los Presupuestos Generales del Estado para 2021 se han venido abajo, una tras otra, convirtiendo las cuentas públicas en una quimera en la que no cuadran ni los ingresos, ni los gastos.

El PIB crecerá muy por debajo de lo que se preveía en el cuadro macroeconómico, causando una caída de los ingresos fijados y un aumento del desempleo muy superior a lo anticipado. Ya en su día, en esta misma columna, se recogían las opiniones de los expertos de que los Presupuestos eran una declaración de buenas intenciones imposibles de cumplir; pero ahora ya se ha comprobado que están gripados, como un motor al que le falta aceite y no puede funcionar.

El Fondo Monetario Internacional, la OCDE, el Banco de España y la AIREF fueron pinchando los globos lanzados por el Gobierno, hasta que la vicepresidenta segunda, Nadia Calviño, tuvo que comparecer la semana pasada para revisar a la baja la previsión de crecimiento del PIB para este año y al alza las del déficit y la deuda pública y la tasa de paro. Nada cuadra y esa es la peor tarjeta de visita para sentarse con la Comisión Europea a partir del 30 de abril a presentar los planes de reconstrucción y el calendario de entrega de los 140.000 millones de euros de ayudas que le corresponderían a España por el *Next Generation EU*.

La falta de credibilidad de Pedro Sánchez en Bruselas se arrastra desde que desaprovechó la bonanza económica de 2019 para sanear las cuentas públicas. En vez de continuar con el proceso de reducción del déficit y la deuda pública, el gobierno socialista dilapidó las cuentas públicas mediante la táctica de los viernes sociales, por la que cada Consejo de Ministros se dedicaba a anunciar nuevas medidas que acarrearían un fuerte aumento del gasto, con el objetivo de captar votos para unas elecciones que tendría que convocar si no conseguía aprobar la

Ley de Presupuestos.

Y así sucedió. El PSOE tuvo que disolver el Parlamento y ganó las elecciones en noviembre de 2019. A cambio, desfondó las cuentas públicas y tuvo que formar un "gobierno progresista de coalición" con Pablo Iglesias (que hasta el día anterior era su principal enemigo que no le dejaba dormir) y apoyado por partidos independentistas cuyo principal objetivo era, y sigue siendo, destruir el Estado. Con su apoyo, consiguió aprobar los Presupuestos para 2021, con la esperanza de que le aseguraran el cumplimiento íntegro de la Legislatura.

A día de hoy, la única esperanza de Sánchez para seguir en la Moncloa los próximos tres años pasa por seguir cediendo a las presiones de su socio, Unidas Podemos, y de los partidos independentistas. Por eso, algunos líderes y ministros socialistas empiezan ya a vislumbrar la convocatoria de elecciones generales para el próximo otoño, una vez recogidos los frutos de la inmunidad por la vacunación masiva y los primeros fondos europeos.

Mientras tanto, el Gobierno tiene ante sí la dura prueba de negociar con la Comisión Europea los planes de inversión y las reformas imprescindibles para recibir los 140.000 millones de euros asignados por Bruselas. Desde La Moncloa se quiere vender que las conversaciones avanzan a buena velocidad y que los representantes comunitarios están satisfechos por los documentos presentados por España. Nada más lejos de la realidad. Si fuera así, el plan ya estaría concluido y a punto de aprobarse, tal y como preveía nuestro país en el calendario anunciado hace meses.

En primer lugar, los negociadores de la UE no están nada contentos con que el Plan de Reconstrucción no vaya a llegar consensuado con la oposición. Es algo que les resulta incomprensible. Tampoco entienden que el Gobierno haya hecho caso omiso a las advertencias del Consejo de Estado sobre la falta de control en la gestión del Plan y de los fondos. Cuando la Unión Europea ha hecho el enorme esfuerzo de aprobar un ambicioso plan de ayudas para todos los países miembro, lo mínimo que piden es un acuerdo interno de las principales fuerzas políticas de cada país.

Eso sin contar que en las reuniones mantenidas entre los funcionarios de España y la UE en los últimos meses ha habido numerosos choques sobre tres de las reformas prioritarias para Bruselas: Laboral, Pensiones y Fiscal. El equipo de Nadia Calviño lleva semanas dando largas sobre el fondo y la forma de esas políticas, con la excusa de que se están negociando con las fuerzas políticas y sociales. La verdadera razón de que los proyectos no estén concluidos es la falta de acuerdo interno en el propio Gobierno. Los bloques del PSOE y de Unidas Podemos en el Ejecutivo mantienen posiciones muy alejadas sobre las tres reformas, como se ha puesto de manifiesto públicamente desde principios de año.

Los ministros de UP insisten una y otra vez en la obligación de cumplir el pacto de gobierno, que incluía la derogación total de la reforma laboral de 2012, subidas masivas de impuestos y crecimiento de las pensiones. Los socialistas, por su parte, no están dispuestos a llegar tan lejos, porque saben que las condiciones han cambiado mucho desde que se firmó ese pacto. Además Bruselas presiona para que esas tres reformas vayan en línea con el resto de los países miembros.